

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

PROCESO No:	11001-33-35-029-2022-00293 00
DEMANDANTE:	WILLIAM SÁNCHEZ LÓPEZ
DEMANDADO:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Visto el informe secretarial que antecede, procede el Despacho a resolver lo pertinente respecto del recurso de Reposición interpuesto por la parte demandante en contra de la decisión adoptada el 08 de septiembre de 2022, previo las siguientes:

I. ANTECEDENTES

El señor William Sánchez López, actuando por intermedio de apoderada interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad Militar, con el fin de obtener la nulidad parcial de la Resolución No. 2028 del 27 de julio de 2007 – a través de la cual le fue reconocida pensión de Jubilación al demandante y del Oficio No. RS20220124004666 del 24 de enero de 2022, como consecuencia de ello a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada a efectuar el reconocimiento, pago, reliquidación y reajuste de la pensión de Jubilación con la inclusión de las partidas computables correspondientes a las primas de servicio y actividad conforme a lo previsto en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.

Con auto fechado el 08 de septiembre de 2022, se inadmitió la demanda para que la parte actora subsanará, en el sentido de allegar certificación e indique todos y cada uno de los factores salariales y salarios devengados por el actor durante su vida laboral ante la entidad demandada.

DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

La apoderada de la parte demandante, manifiesta que de conformidad con el artículo 162 del C.P.A.C.A, el cual señala que los requisitos de la demanda para su admisión, señalando que la certificación solicitada no se encuentra enlistada y, por ende, el Despacho en esta etapa procesal, pretender exigir requisitos no contenidos en la norma. Asimismo, precisa que, si tal certificación resultara indispensable como requisito para la admisión de la demanda, la suscrita no es la mejor calificada para atender el requerimiento de la documental, dado que los documentos requeridos no están en su poder ni en el del demandante y, por lo tanto, el llamado a atender el requerimiento es la entidad demandada – pues es la pagadora de los haberes salariales del demandante a lo largo de su vida aboral.

Agrega además que, el Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad al momento de contestar a demanda, está en el deber legal de allegar todos los antecedentes administrativos de los actos demandados, donde se encuentre claramente la certificación de haberes salariales que echa de menos su señoría.

Conforme a lo expuesto, indica que a la apoderada le es imposible obtener la certificación requerida en el lapso de 10 días por este Despacho, razón por la cual solicita revocar el auto aquí recurrido, disponiendo la admisión de la demanda o de manera subsidiaria, en caso de persistir con el interés en la certificación de haberes salariales, disponga librar el respectivo oficio a la entidad demandada, para que sea ella, quien acate el requerimiento documental, pues solo en sus archivos, reposa dicha documentación y que estará atenta a tramitar el oficio que el Despacho disponga emitir, a efectos de obtener la respuesta necesaria que satisfaga el interés del Juez.

II. CONSIDERACIONES

En contra del referido auto y de conformidad con el artículo 242 de la ley 1437 de 2011 – modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2020, establece que “El recurso de Reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso”.

En virtud de lo anterior, el artículo 318 del Código General del Proceso en su Inciso 3°, precisa lo siguiente:

“El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie del auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto”. (Subrayado fuera del texto)

De conformidad con lo expuesto, se tiene que el recurso debe interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto y, teniendo en cuenta que el auto recurrido que notificado por estado el 09 de septiembre de 2022, la parte actora tenía hasta el 16 de septiembre de 2022 para presentar el recurso de Reposición y dado que el mismo fue interpuesto el **14 de septiembre de 2022**, se encuentra dentro del término establecido para tal fin; razón por la cual, procede esta sede judicial a resolver lo pertinente.

En virtud de lo expuesto, para el Despacho no son dables los argumentos expuestos por la recurrente, comoquiera que al momento de realizar el estudio de la demanda de la referencia y los anexos aportados con la misma, se evidencia que no obra certificación de los factores salariales cuyo reconocimiento, pago y, reajuste solicita la parte demandante sean incluidos en su pensión de Jubilación dentro de las pretensiones de la demanda, es decir, que al adolecer de vicios formales para efectos de proceder a su admisión, los certificados relacionados con los factores salariales que fueron requeridos previamente a la admisión de la demandada- a través del auto de fecha 08 de septiembre de 2022 (recurrido), son indispensables - con el fin de iniciar y avanzar en debida forma.

En efecto, el art. 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la ley 2080 de 2021, dispone como requisitos formales de la demanda, los siguientes:

“Art. 162. Contenido de la demanda: Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.

2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.

3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

5. **La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.**

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.

8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.”

A su vez, el art. 166 ibidem, indica que a la demanda deberá acompañarse los siguientes anexos:

“1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, según el caso. Si se alega el silencio administrativo, las pruebas que lo demuestren, y si la pretensión es de repetición, la prueba del pago total de la obligación.

Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o el periódico, gaceta o boletín en que se hubiere publicado de acuerdo con la ley, a fin de que se solicite por el Juez o Magistrado Ponente antes de la admisión de la demanda. Igualmente, se podrá indicar que el acto demandado se encuentra en el sitio web de la respectiva entidad para todos los fines legales.

2. **Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante,** así como los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho.

3. El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título.

4. *La prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privado. Cuando se trate de personas de derecho público que intervengan en el proceso, la prueba de su existencia y representación, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley.*

5. *Copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público”.*

Por su parte, el art. 167 del Código General del Proceso, aplicable al procedimiento contencioso conforme a las previsiones del art 306 de la ley 1437 de 2011, establece de manera textual que ***“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”***.

En lo que atañe a la **carga de las partes en los asuntos litigiosos**, tenemos que conforme a lo previsto en el inciso final del art 103 del C.P.A.C.A., quien acude a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, **estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en dicho código.**

Disposición que debe acompasarse con los deberes impuestos a los extremos procesales para la obtención de los elementos de convicción que pretenda hacer valer, como es el caso del previsto en el art. 78 numeral 10 del Código General del Proceso, en el que se define como deber de las partes y de los apoderados el de **“abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir”**; en el mismo sentido el inciso segundo del art 173 del CGP, prevé que ***“el juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que directamente o en ejercicio del derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que la solicite, salvo que la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente”***.

De las reglas procesales citadas, se concluye que lo perseguido por el legislador es dejar en manos del interesado el deber de probar los hechos que alega y de suministrar los elementos de convicción que permitan a la autoridad judicial realizar el análisis jurídico, de tal suerte que la labor de recaudo probatorio está

principalmente a cargo de las partes, para que el proceso se pueda tramitar con **celeridad**, sin afectar los principios de imparcialidad e independencia del juez.

De conformidad con lo expuesto, esta Sede Judicial reitera que, al revisar los anexos aportados con la demanda, se observa que no aportó las documentales relacionadas con los factores salariales y los salarios devengados por el actor durante su vida laboral ante entidad demandada, pruebas que son indispensables – con el fin de estudiar la procedencia o no de las pretensiones de la demanda al momento de proferir sentencia; además no es de recibido por el Despacho, lo manifestado por la apoderada de la parte actora, cuando manifiesta que la llamada a atender el requerimiento solicitado es la entidad demandada, dado que si bien es la entidad demandada quien pagaba los salarios del demandante durante su vida laboral, también lo es que, a la parte actora tiene la carga de probar y allegar las pruebas correspondientes con el fin de acreditar y soportar lo pretendido con la demanda.

En este orden de ideas, no encuentra el Despacho argumentos suficientes para revocar la decisión que se tomó mediante el auto de fecha 08 de septiembre de 2022, por medio del cual se inadmitió la demanda, razón por la cual, se procederá a confirmarla y se correrá nuevamente el término de diez (10) días concedido en la misma para efectos de presentar escrito de subsanación en aplicación a lo previsto en el artículo 118 del Código General del Proceso, que reza:

“Artículo 118. Cómputo de términos.

(...)

Cuando se interpongan recursos contra la providencia que concede el término, o del auto a partir de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la ley, éste se interrumpirá y comenzará a correr a partir del día siguiente al de la notificación del auto que resuelva el recurso.

(...)”

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha 08 de septiembre de 2022, notificado por estado el 09 de septiembre de la misma anualidad y que dispuso la inadmisión de la demanda presentada por el señor William Sánchez López en contra del Ministerio

de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Al día siguiente de la notificación por estado del presente proveído, comienza a correr el término de 10 días para la subsanación de la demanda presentada por el señor William Sánchez López, en los términos dispuestos en el auto de fecha 08 de septiembre de 2022 y siguiendo las previsiones del Artículo 118 del C.G.P.

TERCERO: Una vez cumplido el término previsto en el ordinal anterior, reingrese el expediente al Despacho para continuar con el trámite que corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

RYGH

JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior

Hoy 11 de noviembre de 2022 a las 8:00 a.m.

PARTES	CORREO ELECTRÓNICO
APODERADO DEMANDANTE:	kellyeslava@statusconsultores.com contacto@statusconsultores.com
APODERADO DEMANDADA:	notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co notificacionesDGSM@sanidadfuerzasmilitares.mil.co
MINISTERIO PÚBLICO: PROCURADOR 191 JUDICIAL PARA	procjudadm191@procuraduria.gov.co

ASUNTOS	
ADMINISTRATIVOS	